



Santiago y Ciudad de México: retos y soluciones conjuntas para el reforzamiento de los gobiernos locales y la integración socioeconómica de los migrantes y refugiados urbanos.

Con la participación de: Karla Ambrosio, Coordinadora Técnica y de Vinculación, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C. de México; Luis Berríos Salinas, Secretario Ejecutivo, Vicaría Pastoral Social Caritas de Chile; Ana Bell Jara, Consejera Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, y; Samer Saliba, Jefe de Práctica, Consejo de Alcaldes para la Migración (MMC).

Octubre 2021

Dos polos regionales de atracción, Santiago de Chile y la Ciudad de México son hogar y tierra de tránsito y de retorno para muchos migrantes y refugiados de varias partes del mundo. Estos dos centros urbanos brindan una amplia gama de oportunidades socioeconómicas y protección para quienes buscan mejores medios de subsistencia, educación, acceso a empleos y servicios, mejor calidad de vida, y seguridad para ellos y sus familias.

Chile es hogar de más de 1'462.103 de personas migrantes y refugiadas, de los cuales el 15,1% viven en Santiago y provienen principalmente de Venezuela (30,7%), Perú (16,3%) y Haití (12,5%) ([INEL-DEM, 2021](#)). Asimismo, en México—país precursor del Pacto Mundial para una Migración, Segura, Ordenada y Regular ([PMM](#))—, la Ciudad de México alberga a más de 44.332 que corresponde al 28,4% de los migrantes y refugiados que viven en dicho país, originarios especialmente de Venezuela, Honduras y El Salvador ([Secretaría de Gobernación, 2020](#)).

Nuestro mundo es cada vez más urbano. Según estimaciones, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y se espera que esta cifra aumente hasta un 70% para el año 2050 ([OCDE, 2021](#)). “El mayor desafío no son los migrantes mismos, sino la capacidad y preparación de los gobiernos locales para abordar los retos multidimensionales de dichos flujos migratorios”, afirma Samer Saliba, planificador de ciudades y Jefe de Práctica en el Consejo de Alcaldes para la Migración (MMC).

Santiago de Chile y Ciudad de México enfrentan numerosos retos técnicos y financieros para lograr una inclusión socioeconómica segura y estable de los migrantes y refugiados. Ante el estallido de la pandemia Covid-19, estos obstáculos han puesto de manifiesto y exacerbado los desafíos que enfrentan estas poblaciones para acceder a los servicios de salud y oportunidades laborales que les permitan tener una vida digna para ellos y sus familias.

En Ciudad de México, el Covid-19 sumó retos a los retos. “Si ya se tenía un entorno con diversas áreas de oportunidad para transformar la discriminación hacia el reconocimiento de la otredad, de la exclusión a la inclusión, la pandemia marcó un retroceso significativo”, declara Karla Ambrosio, Coordinadora Técnica y de Vinculación de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C. (ICPD). Para Karla, el impacto de la pandemia se tradujo además de una mayor vulnerabilidad de estas comunidades, en importantes recortes y suspensiones temporales de programas sociales como el de la interculturalidad en Ciudad de México.

Si bien la pandemia ha afectado la comuna de Santiago en todos los aspectos, esta ha presentado desafíos únicos para sus migrantes y refugiados urbanos. Para Luis Berríos Salinas, Secretario Ejecutivo en la Vicaría Pastoral Social Caritas, la emergencia del Covid-19 intensificó las vulnerabilidades ya preexistentes en dichos grupos. “Muchos trabajadores migrantes quedaron sin empleo y sin ayudas del gobierno debido a la irregularidad de sus situaciones migratorias. Incluso, muchos migrantes sin medios económicos para pagar el arriendo fueron desalojados de sus hogares”.

Efectivamente, la irregularidad del estatus migratorio es uno de los mayores retos que esta población enfrenta tanto en Santiago como en Ciudad de México. Además de los impactos significativos en las condiciones de vida de los trabajadores migrantes por causa de la pandemia, nuevos retos han emergido en aquellas personas en situación migratoria irregular y/o de informalidad laboral en ambas ciudades.

Estos grupos sufren una mayor vulnerabilidad ante la pérdida del empleo e ingresos económicos, acceso limitado a los servicios médicos, y a las diversas formas de abuso y explotación laboral.

Tal y como lo reitera Luis, en Santiago, migrantes particularmente de nacionalidad venezolana y haitiana ingresados por pasos no habilitados, no reúnen las condiciones necesarias para acceder al proceso de regularización que lleva a cabo actualmente el Gobierno Chileno. “Esta población nos preocupa mucho ya que tiene todas las barreras para integrarse, ya sea para tener acceso a una documentación, a un empleo formal, a servicios o a procesos de reunificación familiar. Por ende, están en su mayoría condenados a vivir en altos índices de precariedad de manera permanente”.

El difícil acceso a programas sociales, documentación y empleos formales, así como el recrudecimiento de narrativas discriminatorias, son sin duda unos de los principales retos que también tiene la Ciudad de México para garantizar una plena inclusión socioeconómica de los migrantes y refugiados. “Por ejemplo, la difícil obtención de la CURP (Clave Única de Registro de la Población), limita no solamente el acceso al empleo formal, si no también los deja sin sus derechos fundamentales”, plantea Karla. A lo anterior se suman también obstáculos en el reconocimiento mutuo de documentos educativos y formativos con validez oficial en México.

Por otro lado, según Ana Bell Jara, Consejera Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el principal obstáculo en la integración socioeconómica de migrantes en Santiago reside en la escasez de mecanismos de inclusión previstos a nivel nacional y local. Dicha barrera es combinada con lo que Ana Bell señala ser la inexistencia de un diálogo sólido y duradero con el sector empresarial y las autoridades locales, que garanticen vías de migración regular y mecanismos de integración sostenibles.

Como consecuencia, al huir de sus países de origen, “la gente en su desesperación no tiene otra solución que arriesgar su propia vida por pasos peligrosos no habilitados. Esto genera un mayor ingreso irregular al territorio nacional y se expone entre otros, a situaciones de explotación laboral, precariedad, y sin protección social”, narra Ana Bell.

Incluso si estos escenarios presentan desafíos mayores para cada gobierno, la participación activa de autoridades locales, el sector privado, y actores de la sociedad civil, contribuyen no solamente a fomentar agendas más inclusivas, si no también a hacer que las personas en movilidad humana sean agentes de cambio y de desarrollo en sus comunidades de acogida.

En el caso de México, la ICPD con la Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales del gobierno de esta ciudad, diseñaron el proyecto “Juventus CMX” con la finalidad de contribuir a la inclusión sociolaboral de los jóvenes —incluyendo a jóvenes migrantes sin importar su estatus migratorio— en empleos dignos a través de estrategias de fortalecimiento institucional, capacitación, participación y articulación multiactoral.

Dichas alianzas tripartitas entre las autoridades locales, el sector privado y la sociedad civil, permite hoy en día a jóvenes migrantes y refugiados participar en una gran variedad de programas de formación en economías verdes y emprendimiento. “Las personas en movilidad tienen muchísimo potencial y excelentes ideas para poder ser ellos mismos líderes de empresas sociales, de cooperativas y de iniciativas que puedan ayudar a una economía circular y social en la ciudad de México”, expresa Karla.

Del mismo modo, la CUT además de desarrollar programas de habilitación de competencias y de capacitación en Santiago, fomenta junto con el sector privado perfiles de competencia a través el programa “Chile Valora”, que busca certificar las competencias laborales de migrantes y refugiados. La Vicaría Pastoral, por su lado, dispone en esta ciudad de programas de emprendimiento acompañados de asistencia técnica y entrega de capitales semillas, y de planes de acompañamiento como la “metodología de empleo protegido”, donde la empresa se compromete a hacer un acompañamiento más intensivo en el desarrollo profesional de los migrantes y refugiados.

Sin embargo, incluso si estos programas contribuyen a reducir diversos sesgos y a construir una arquitectura institucional y una normativa más inclusiva, el volumen creciente de migrantes y refugiados urbanos es mayor a la capacidad técnica y presupuestal de los gobiernos locales tanto en Santiago como en Ciudad de México. En este sentido, en sinergia con los principios rectores del Pacto Mundial, fomentar alianzas multipartitas con un enfoque pansocial y pangubernamental, y reforzar las capacidades de las autoridades locales y de otros actores involucrados, surgen como una prioridad para lograr una gobernanza migratoria más sostenible y protectora de derechos.

Según la ICPD, reconocer a la Ciudad de México como un lugar de destino es fundamental para transformar la concepción de los derechos sociales y los programas que se ofrecen a la población migrante y refugiada. Para Karla, es primordial fomentar la promoción y el afianzamiento de diálogos y compromisos entre autoridades locales, el sector empresarial y la sociedad civil, generar procesos de contratación inclusiva, y la sensibilización de funcionarios públicos al reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes y refugiados. “Esa apertura para reconocer a las personas en movilidad humana y refugiadas como actores y aliados para el desarrollo sostenible es clave en sus procesos de inserción socioeconómica”, afirma ella.

Por otro lado, tanto para la CUT como para la Vicaría Pastoral, el diálogo con el sector empresarial en Santiago es clave para facilitar los procesos de integración por medio de empleos protegidos con prestaciones sociales. “Tenemos mucha gente migrante y refugiada muy capacitada. Sin embargo, en Chile, estamos aún muy lejos de poder entregarles las herramientas necesarias para una remuneración justa de acuerdo con sus capacidades”, añade Ana Bell.

No obstante, a pesar de sus diferencias, las similitudes en los flujos y la variedad de barreras que los migrantes y refugiados pueden enfrentar, hacen de Santiago y Ciudad de México un escenario interesante para plantear y articular soluciones comunes. El Programa Conjunto del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples ([MPTE](#)) relativo al desarrollo de capacidades de los gobiernos locales para fortalecer la integración socioeconómica de migrantes y refugiados en estas ciudades, encarna la necesidad de una mayor cooperación internacional entre todos los actores relevantes en materia de migración, reconociendo que ningún Estado puede abordar la migración por sí mismo ([PMM, 2018](#)).

La cooperación de ciudad a ciudad surge como un instrumento fundamental para abordar y reducir colectivamente las necesidades y vulnerabilidades de los migrantes y sus comunidades mediante el respeto, la protección, y el cumplimiento de sus derechos humanos. Para Samer, “las buenas ideas son contagiosas y se diseminan más fácilmente entre los gobiernos locales, ya que no adhieren a los mismos regímenes políticos rígidos de sus gobiernos nacionales. Esta flexibilidad permite una mayor innovación que puede ser replicada entre ciudades”.

Por ello, resulta imprescindible fomentar alianzas sólidas capaces de diseñar espacios de diálogo y de intercambio de buenas prácticas de ciudad a ciudad. Para este fin, la cooperación técnica y financiera es indispensable para mejorar y diseñar acciones dirigidas a la autosuficiencia y el empoderamiento de los migrantes y refugiados y sus gobiernos locales, y finalmente para el cumplimiento de agendas comunes como lo son el Pacto Mundial y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Mateo Merchan
Regional Liaison and Project Officer to the UN Network on Migration